



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-5

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 59 O R D I N A R I A

LUNES 26 DE JUNIO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta minutos del lunes veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para celebrar la sesión pública ordinaria prevista en el punto cuarto del Acuerdo Plenario 4/2017, de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la cual se seleccionarán seis candidatos que, conforme al criterio de los Ministros, cuenten con los mayores méritos curriculares y con un perfil acorde con las funciones que realizan los Magistrados que deben integrar la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I. y Javier Laynez Potisek.

El señor Ministro Alberto Pérez Dayán no asistió a la sesión por desempeñar una comisión oficial.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión pública plenaria a realizarse conforme a lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo Plenario 4/2017.

I. APERTURA DE LA SESIÓN



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró abierta la sesión pública ordinaria.

**II. LECTURA AL INFORME RELATIVO
A LAS OBSERVACIONES Y
OBJECIONES PRESENTADAS
RESPECTO DE LA LISTA
APROBADA POR EL TRIBUNAL
PLENO EN SU SESIÓN
CELEBRADA EL LUNES DOCE
DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISIETE**

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos informó que, del dieciséis al veintidós de junio del año en curso, no se recibieron observaciones ni objeciones respecto de los candidatos que integran la lista aprobada por el Tribunal Pleno en su sesión celebrada el lunes doce de junio de dos mil diecisiete.

**III. LECTURA DE LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR ESTA SESIÓN
PÚBLICA**

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio lectura a las reglas aprobadas, en los siguientes términos:

“La sesión pública, una vez declarada abierta por el Presidente, se desarrollará en los siguientes términos:

1. Se dará lectura a las presentes reglas.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

2. Al inicio de la sesión, cada uno de los Ministros entregará al secretario general de acuerdos tarjetón amarillo previamente sellado por la Secretaría de la Presidencia en el que indique el nombre de seis candidatos que, conforme a su criterio, cuenten con los mayores méritos curriculares y con un perfil acorde con las funciones de Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3. A su vez, el secretario general de acuerdos entregará a cada uno de los Ministros tarjetón a doce columnas para reflejar la votación que se dé con motivo de la lectura de cada uno de los tarjetones amarillos en los que cada Ministro haya indicado seis aspirantes seleccionados, así como el total de los votos obtenidos por candidato.
4. El Ministro Presidente designará como escrutadores a los Ministros Presidentes de la Primera y de la Segunda Salas de este Alto Tribunal.
5. El secretario general de acuerdos, una vez que cuente los tarjetones amarillos en los que cada Ministro haya indicado seis aspirantes seleccionados, los revolverá, los identificará con un número del 1 al 11 y los entregará en orden y forma alterna a cada uno de los Ministros escrutadores, informando en voz alta el número del tarjetón entregado al escrutador.
6. Cada uno de los Ministros escrutadores, alternadamente, dará lectura a los nombres de los aspirantes señalados en cada uno de los tarjetones amarillos entregados por los Ministros. Uno de los Ministros escrutadores leerá el número y el nombre del candidato, el otro Ministro volverá a leerlo y, una vez que haya quedado registrado en el sistema de



cómputo, así lo indicará. Concluida la lectura y cómputo de los nombres precisados en un tarjetón, el secretario general de acuerdos deberá destruirlo. El tarjetón se anulará cuando no contenga los seis nombres de su preferencia. Se anulará un voto cuando no sea factible identificar al candidato correspondiente.

7. La votación oficial la llevará el secretario general de acuerdos, debiendo tomarse en cuenta que la votación plasmada en el sistema informático es únicamente de apoyo.

8. Al concluir la lectura de los 11 tarjetones amarillos, el Ministro Presidente consultará a los Ministros si están de acuerdo con el cómputo realizado o si tienen alguna objeción al procedimiento.

9. Al concluir el registro de los votos señalados en los 11 tarjetones amarillos, el secretario general de acuerdos verificará los resultados obtenidos y leerá los nombres de los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.

10. En caso de que exista un empate para ocupar alguno de los últimos lugares de los necesarios para la integración de la lista, se procederá en los siguientes términos:

10.1. El secretario general de acuerdos informará al Ministro Presidente los aspirantes que participarán en la siguiente ronda de votación y el número de lugares por los que deberá votarse.

10.2. El secretario general de acuerdos ordenará la impresión de una lista en color azul en la que consten los nombres de los candidatos que hayan empatado. Dicha lista se entregará a cada uno de los Ministros.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

10.3. A continuación, el secretario general de acuerdos dará lectura a los nombres de los candidatos que se encuentren empatados para ocupar alguno de los lugares y mencionará el número de votos que pueden emitirse en esta lista.

10.4. Para llevar a cabo la votación respectiva, en la lista impresa en color azul, cada uno de los Ministros marcará el o los nombres de los candidatos de su preferencia que hagan falta para integrar la lista de seis candidatos.

10.5. A continuación, se seguirán, en lo conducente, las reglas 5 a 9.

10.6. Si con posterioridad al desarrollo de esta ronda de votación prevalece un empate para ocupar alguno o algunos de los últimos lugares, se llevarán a cabo las rondas necesarias para el desempate aplicando, en lo conducente, las reglas 10.1 a 10.5.

11. El Ministro Presidente, atendiendo a lo previsto en el numeral 3 del punto cuarto del referido Acuerdo, convocará a los seleccionados para que acudan a la sesión pública a que se refiere el punto quinto del mismo, la que tendrá lugar el lunes tres de julio de dos mil diecisiete.”

**IV. ENTREGA AL SECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DE
LOS TARJETONES AMARILLOS
PREVIAMENTE SELLADOS POR
LA SECRETARÍA DE LA
PRESIDENCIA, ASÍ COMO DE
LAS TABLAS DE APOYO PARA
COMPUTAR LA VOTACIÓN
RESPECTIVA**

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos recolectó los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

tarjetones amarillos previamente sellados por la Secretaría de la Presidencia y entregó a los señores Ministros las tablas de apoyo para computar la votación respectiva.

V. DESIGNACIÓN DE ESCRUTADORES

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales designó como escrutadores a los señores Ministros Piña Hernández y Medina Mora I., Presidentes de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, respectivamente.

VI. LECTURA DE LOS TARJETONES AMARILLOS PREVIAMENTE SELLADOS POR LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Y EL CÓMPUTO RESPECTIVO

A continuación, por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos recogió los tarjetones amarillos, los revolvió, numeró y entregó en orden y alternadamente a los señores Ministros escrutadores. Los señores Ministros Piña Hernández y Medina Mora I. dieron lectura en forma alternada de los nombres señalados en los tarjetones amarillos y, concluida ésta, se obtuvieron los siguientes resultados:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

NOMBRE DEL ASPIRANTE	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	T.10	TOTAL
Avilés Albavera Hertino										1	1
Báez Silva Carlos											0
Bracho Alegría Adriana		1	1	1	1				1		5
Cerón Amado Luis Enrique											0
Cruz Ricárdez Julio César											0
De los Cobos Sepúlveda Carlos Alfredo											0
Garay Morales Leonor		1	1								2
García Huante Berenice		1		1		1		1	1		5
González Durán Fernández Alejandro	1				1		1				3
Guerrero Olvera Sergio Arturo						1	1	1	1	1	5
Hinojosa Islas Alejandro Raúl											0
Jiménez Corzo Javier											0
Lara Patrón Rubén Jesús	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Martínez Flores Isaías											0
Olvera Acevedo Alejandro	1										1
Penagos Robles Nínive Ileana	1		1		1	1	1	1	1	1	8
Pérez Torres José Fidel											0
Ramírez Salcedo José										1	1
Ramos Sobarzo Arturo											0
Rico Ibarra Antonio											0
Silva Díaz Ricardo Antonio	1	1	1	1	1		1	1		1	8
Sosa Echeverría José Arturo											0
Valdovinos Mercado Omero				1		1		1			3
Vargas Baca Carlos	1	1									2
Villafuerte Castellanos Rolando			1	1	1	1	1		1		6

VII. RESULTADOS PARCIALES
OBTENIDOS

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos informó que los primeros cuatro candidatos que obtuvieron la votación suficiente para avanzar a la siguiente etapa son:

NÚMERO	NOMBRE DEL ASPIRANTE	VOTOS
1	Lara Patrón Rubén Jesús	10
2	Penagos Robles Nínive Ileana	8
3	Silva Díaz Ricardo Antonio	8
4	Villafuerte Castellanos Rolando	6



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asimismo, informó que, para ocupar los lugares números cinco y seis, se presentó un empate a cinco votos entre los siguientes tres aspirantes:

NÚMERO	NOMBRE DEL ASPIRANTE	VOTOS
5	Bracho Alegría Adriana	5
6	García Huante Berenice	5
7	Guerrero Olvera Sergio Arturo	5

**VIII. VOTACIÓN PARA DESEMPATE
PREVISTA EN LOS PUNTOS 10 A
10.5 DE LAS RESPECTIVAS
REGLAS**

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales indicó que, para la ronda de desempate y para simplificar el proceso, los señores Ministros únicamente marquen los nombres de los dos aspirantes que, conforme a su criterio, deban elegirse para la lista definitiva.

A continuación, por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos entregó los tarjetones azules con los tres nombres que empataron con cinco votos; una vez que recolectó los tarjetones azules, los revolió, numeró y entregó en orden y alternadamente a los señores Ministros escrutadores.

Los señores Ministros Piña Hernández y Medina Mora I. dieron lectura en forma alternada de los nombres señalados en los tarjetones azules y, concluida ésta, el secretario general de acuerdos informó los siguientes resultados:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

NOMBRE DEL ASPIRANTE	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	T.10	TOTAL
Bracho Alegría Adriana	1	1	1	1	1	1		1	1		8
García Huante Berenice		1			1	1	1			1	5
Guerrero Olvera Sergio Arturo	1		1	1			1	1	1	1	7

IX. RESULTADOS OBTENIDOS

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos informó que los aspirantes que deberán ocupar los lugares números cinco y seis de la lista definitiva son Bracho Alegría Adriana y Guerrero Olvera Sergio Arturo.

Por ende, la lista definitiva de seis lugares quedó integrada por:

1. Bracho Alegría Adriana
2. Guerrero Olvera Sergio Arturo
3. Lara Patrón Rubén Jesús
4. Penagos Robles Nínive Ileana
5. Silva Díaz Ricardo Antonio
6. Villafuerte Castellanos Rolando

El Tribunal Pleno, por votación económica y unánime, aprobó la lista definitiva de seis aspirantes.

X. CONVOCATORIA DE LOS SEIS ASPIRANTES SELECCIONADOS

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales convocó a los seis aspirantes mencionados a la sesión pública que tendrá verificativo a las diez horas del lunes tres de julio de dos mil diecisiete en esta Suprema Corte de Justicia de la



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Nación, para los efectos precisados en el punto cuarto del Acuerdo Número 4/2017 de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.

XI. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cincuenta y ocho ordinaria, celebrada el jueves veintidós de junio del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

XII. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes veintiséis de junio de dos mil diecisiete:

I. 99/2016
y Ac.
104/2016

Acción de inconstitucionalidad 99/2016 y acumulada 104/2016, promovidas por los Partidos Políticos MORENA y de la Revolución Democrática, demandando la invalidez del “Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1o. de julio de 2008”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de dos mil dieciséis. En el proyecto formulado por el señor Ministro



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se propuso: “PRIMERO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016. SEGUNDO. Se sobresee la acción por lo que hace a los artículos primero y segundo transitorios del “Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 2008”, publicado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en términos del apartado III de la presente ejecutoria. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo único del “Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1o. de julio de 2008”, publicado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en los términos precisados en el apartado VIII de la presente ejecutoria; en la inteligencia de que tal declaratoria de invalidez surtirá sus efectos cuando se notifiquen estos puntos resolutivos, respectivamente, al Poder Ejecutivo Federal y a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reabrió la discusión en torno al apartado VII, relativo al estudio de fondo.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que la legitimación de un juzgador depende fundamentalmente de que su nombramiento se haya llevado a cabo cumpliendo con los presupuestos fundamentales siguientes: 1) que la autoridad que realice el nombramiento tenga la competencia para ello, 2) que la persona designada haya cumplido cabalmente los requisitos constitucionales y/o legales establecidos para ocupar el cargo, y 3) que el nombramiento o designación se haya llevado a cabo de manera integral, de ser el caso, bajo el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico aplicable para ello.

Señaló que el término del mandato de un juez, en un régimen de transición, no condiciona ni afecta de manera directa o indirecta esa legitimación inicial, ni su estabilidad o autonomía como juzgador, ni la independencia del tribunal. En el caso concreto, precisó que ni en los trabajos legislativos que generaron la reforma impugnada ni la precedente, ni en las intervenciones de los señores Ministros se dijo que la determinación del Congreso de la Unión de dos mil ocho fuera inconstitucional por fijar tres, seis y nueve años, respectivamente, para el término del mandato de los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

magistrados de la Sala Superior; en la inteligencia de que, en todo caso, se han pronunciado —quienes están en contra del proyecto— en el sentido de que se fortalece o de que es más conveniente el nuevo sistema; sin embargo, no se ha aseverado que el sistema original es inconstitucional.

Se pronunció en favor del sentido del proyecto y de la mayoría de sus consideraciones, ya que la reforma combatida viola el artículo 99 constitucional, pues modificó por la vía legal —no constitucional— un procedimiento reglado y ya concluido en el nombramiento de esos cuatro magistrados, que no presentaba irregularidad alguna y que, por lo contrario, cumplía cabalmente con las normas constitucionales y legales establecidas para ello, tomando además en cuenta las finalidades que el Constituyente señaló expresamente al prever la renovación total de la Sala Superior y el esquema de escalonamiento.

Leyó el artículo 99 constitucional, tras la reforma de trece de noviembre de dos mil siete —“La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. [...] Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

señale la ley. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. [...] En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original”—, el artículo quinto transitorio respectivo —“Para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados Electorales de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”—, así como los siguientes fragmentos de los trabajos legislativos de dicha reforma constitucional: “Estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta de los autores de la Iniciativa bajo dictamen para establecer la renovación escalonada de los consejeros electorales del Consejo General, y también de los magistrados de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [...] Para hacer posible la renovación escalonada, en armonía con la periodicidad de los comicios federales, consideramos acertada la propuesta de aumentar en dos años el periodo de mandato de los consejeros electorales del Consejo General del IFE, dejando a la ley secundaria la regulación precisa del periodo de transición para tal efecto. Igual criterio, cabe anticipar, se adopta respecto de los magistrados electorales de las salas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

del TEPJF. [...] Respecto de la integración de las salas del TEPJF y de los magistrados electorales que las integran, la Iniciativa bajo dictamen propone tres medidas de importancia, con las que estas Comisiones Unidas coinciden: La primera es el establecimiento de la renovación escalonada de los magistrados electorales, en coincidencia con la propuesta ya considerada en este Dictamen para los consejeros electorales del Consejo General del IFE. Por los mismos argumentos antes expuestos, es de aprobarse la propuesta; La segunda medida se explica en la pertinencia de hacer congruentes los periodos de mandato de los integrantes de los órganos superiores de las dos instituciones fundamentales del sistema electoral mexicano; se propone que el plazo de mandato de los magistrados electorales, tanto de la Sala Superior como de las regionales, sea de nueve años, lo que, cabe mencionar, facilitará su renovación escalonada atendiendo a la periodicidad de los procesos electorales federales. Es de aprobarse; y La tercera medida establece que en caso de vacante definitiva en cualquiera de las salas del TEPJF, el nuevo magistrado solamente concluirá el periodo para el que fue electo el ausente. Es también de aprobarse.”

Apuntó que, con motivo de la anterior modificación constitucional, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el primero de julio de dos mil ocho, en cuyo artículo 187 estableció: “La Sala Superior se integrará por siete magistrados electorales [...] Los magistrados durarán en su encargo nueve años improrrogables; su elección será



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

escalonada. En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original”; y en su artículo transitorio cuarto determinó: “Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente: [...] II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado deberá señalar el período de mandato que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser reelectos”.

Aclaró que, al haberse rendido la protesta constitucional por las personas designadas, bajo las condiciones de temporalidad que daban plena eficacia no solamente a los textos constitucionales y legales, sino también a las finalidades que persiguió la reforma constitucional, no existía razón alguna ni justificación para que se modificaran las condiciones originales de integración y renovación escalonada.

Lo anterior es así, pues la reforma de dos mil ocho, además de establecer el escalonamiento deseado, lo hacía



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

siguiendo las finalidades que el Constituyente permanente determinó para ello, al establecer que se elegirían por el Senado a propuesta de la Suprema Corte tres magistrados por nueve años; dos magistrados por seis años y dos magistrados por tres años, respectivamente, para integrar la Sala Superior, con lo que se lograba que las renovaciones futuras siempre fueran armónicas con la periodicidad de los procesos electorales federales, que se celebran cada tres años.

Así, aun suponiendo que el Congreso de la Unión tiene facultades de configuración legislativa para modificar un proceso de integración de la Sala Superior válido y ya concluido en todas sus fases, seguiría siendo fundado el concepto de invalidez planteado, consistente en que la reforma viola los mandatos de elección escalonada en relación a la periodicidad de los procesos electorales federales, dado que la determinación adoptada de designar dos magistrados por siete años, dos magistrados por ocho años y tres magistrados por nueve años, impide esa relación armónica entre el relevo escalonado de los magistrados y los procesos electorales federales, lo cual era un objetivo prioritario del Poder Revisor de la Constitución.

Explicó que, de acuerdo con el esquema definido en dos mil ocho, dos magistrados terminarían su mandato el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; otros dos, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós; y los tres restantes, el treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por ello, bajo la regla de nueve años para todos, los dos que iniciaran su período el primero de noviembre de dos mil diecinueve, terminarían su mandato el treinta y uno de octubre de dos mil veintiocho; los dos que iniciaran su encargo el primero de noviembre de dos mil veintidós, concluirían su encargo en dos mil treinta y uno; y los tres que iniciarían su mandato el primero de noviembre de dos mil veinticinco, concluirían su mandato el treinta y uno de octubre de dos mil treinta y cuatro. Por tanto, se mantendría la armonía con el escalonamiento y la periodicidad de los procesos electorales federales, esto es, siempre habría una renovación escalonada al año siguiente de la elección federal respectiva, máxime que se previó la regla de que, para las ausencias definitivas durante el mandato de cualquiera de los magistrados, el sustituto solamente podría ser nombrado por el resto del período que le correspondería ejercer al ausente.

Agregó que, por el contrario, el esquema introducido con la reforma de dos mil dieciséis no cumple el referido mandato del Constituyente pues, de acuerdo con el artículo transitorio impugnado, los dos magistrados, cuyo mandato se extendió a siete años, concluirían el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; los dos electos por ocho años, terminarían el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro; y los tres electos por nueve años, fungirían hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco. Asimismo, quienes fueran designados para iniciar su mandato el primero de noviembre de dos mil veintitrés,



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

concluirían su encargo en octubre de dos mil treinta y dos; los nombrados para iniciar el primero de noviembre de dos mil veinticuatro, concluirían el treinta y uno de octubre de dos mil treinta y tres; y los que iniciarán el primero de noviembre de dos mil veinticinco, concluirían el treinta y uno de octubre de dos mil veintiséis. De ese modo, se concentraría siempre en los últimos tres años la renovación total del órgano y, en consecuencia, este esquema no guarda ninguna armonía con la periodicidad de los procesos federales ni se logra plenamente el propósito de combinar la experiencia con la renovación, aunado a que se aleja significativamente de la periodicidad de renovación con los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, que se da cada tres años. Concluyó que lo anterior debilita sensiblemente los objetivos del escalonamiento establecido por el Poder Reformador de la Constitución, puesto que la Sala Superior se renovará siempre, en su totalidad, en los últimos tres años de estos períodos.

Por todas estas razones, anunció su voto en favor del proyecto, reservándose un voto concurrente.

La señora Ministra Luna Ramos recapituló que el proyecto propone la inconstitucionalidad del precepto impugnado con base en cuatro puntos de estudio: 1) violación al procedimiento de designación de magistrados previsto en el artículo 99, párrafo décimo primero, constitucional, 2) violación al principio de división de poderes e independencia judicial, 3) violación a los principios de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

seguridad jurídica e irretroactividad, y 4) violación al esquema regulatorio de escalonamiento en la designación de magistrados electorales.

Por lo que hace al primer tema, observó que el proyecto determina que es inconstitucional el artículo impugnado porque el Congreso de la Unión se arrogó competencias que no le correspondían, sino al Senado y, por otro lado, que al haberse variado el escalonamiento, se viola el principio de independencia judicial.

No compartió ese argumento porque el artículo 99 constitucional, reformado el trece de noviembre de dos mil siete, estableció que “Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. [...] y durarán en su encargo nueve años improrrogables”. Diferenció entre la competencia de esta Suprema Corte, del Senado y del Congreso de la Unión respecto de este proceso. Por lo que hace a la Suprema Corte, debe analizar las solicitudes que presentan las personas interesadas en formar parte de la Sala Superior, mediante una convocatoria y el procedimiento de selección para, posteriormente, mandar las ternas al Senado. El Senado determina, de entre las ternas enviadas por la Suprema Corte, quiénes ocuparán los cargos y, a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cada magistrado, le designa el período que le corresponde.

En la Constitución únicamente se refiere a un período máximo de nueve años en el encargo y, si bien establece el escalonamiento, no es facultad del Senado establecerla, sino del Congreso de la Unión, mediante ley que emita, en la que contemple las reglas y procedimientos correspondientes.

Puntualizó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece el funcionamiento de esta Sala Superior, en cuya reforma de primero de julio de dos mil ocho y en su artículo 187 previó la duración de nueve años, que su elección será escalonada y algunas cuestiones en cuando a una vacante definitiva. En ese tenor, el escalonamiento de la nueva integración de la Sala Superior se estipuló en el artículo transitorio cuarto de esa reforma legal, indicando que “A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025”. Recordó que, el veinte de octubre de dos mil dieciséis, el Senado designó a esos siete magistrados y determinó la duración del período de cada uno de ellos, con lo que valoró como concluido el procedimiento; sin embargo, el tres de noviembre de dos mil dieciséis se reformó nuevamente dicho artículo transitorio cuarto, el cual varió el período del escalonamiento de los magistrados, es decir, de los años dos mil diecinueve, dos mil veintidós y dos mil veinticinco, al dos mil veintitrés, dos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

mil veinticuatro y dos mil veinticinco. Posteriormente, cuatro magistrados rindieron protesta ante el Senado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, es decir, el día en que iniciaban funciones en la Sala Superior. Recalcó que eso significa que la reforma al artículo transitorio cuarto fue anterior a la toma de protesta.

Estimó que el Congreso de la Unión no se arrogó facultades del Senado al haber modificado en esos tiempos el artículo transitorio cuarto, porque la emisión de la ley, en la cual se tengan que establecer el escalonamiento y los períodos de duración, no es una facultad del Senado, sino del Congreso de la Unión, ya que así lo contempla el artículo 99 constitucional y, en el caso, el Senado, en cumplimiento a esa ley, les volvió a tomar la protesta por el período que ahora les corresponde, conforme al nuevo texto del referido artículo transitorio e hizo la declaratoria correspondiente.

Por cuanto hace al tema de la independencia judicial, valoró que el período que dure cada juzgador no guarda relación con su independencia, su autonomía, su vocación ni con los requisitos que deben cumplirse para el cargo, y que fueron analizados para los magistrados en cuestión, en su momento, tanto por la Suprema Corte como por el Senado. Subrayó que el objetivo del proyecto no es analizar la elección de los magistrados, efectuada el veinte de noviembre de dos mil dieciséis por el Senado, ni las normas legales que la fundamentaron, pues tales aspectos gozan de presunción de constitucionalidad y legitimidad democrática.



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Refirió que en el precedente de la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, esta Suprema Corte determinó que este tipo de nombramientos son materia electoral porque inciden directamente en la calificación de las elecciones. Aludió a que, en otro precedente, se estimó que la prórroga de mandato es inconstitucional cuando implique la prolongación de la legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentren en funciones en ese momento, y que signifique la prolongación más allá del período para el cual fueron electos, pues se suplantaría la voluntad popular, mas no se analizaron los nombramientos de magistrados. Aclaró que, en el caso, también resultaría inconstitucional si se estuviera prorrogando el plazo de nueve años para los magistrados, pero no sucedió así.

Rememoró que en el precedente de la acción de inconstitucionalidad 30/2011, se estudió una situación muy similar a la del proyecto: un decreto que establecía la prórroga del nombramiento de consejeros electorales y de magistrados electorales —texto anterior a la reforma: “DÉCIMO. Los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, en su caso que sean ratificados por un periodo más y los designados en el año dos mil ocho, durarán en su cargo del veintinueve de mayo de dos mil ocho al quince de noviembre de dos mil once”; texto posterior a la reforma: “DÉCIMO. Los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado y los magistrados del Tribunal Electoral del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Estado, ratificados y los designados en el año dos mil ocho actualmente en funciones, durarán en su cargo del veintinueve de mayo de dos mil ocho al quince de noviembre de dos mil doce, por esta única ocasión”—, resultando en un año más de funciones. En consecuencia, esta Suprema Corte señaló que “Incluso, aun cuando se estimara que se trata de una violación indirecta a la Constitución Federal que ameritara ser examinada, dada su estrecha relación con el problema de inconstitucionalidad planteado, se observa que no hay la pretendida colisión de preceptos que señala el Partido del Trabajo, pues la facultad de elegir a los consejeros y magistrados electorales locales, y en su caso, ratificarlos, no riñe con la prórroga de su mandato en forma transitoria, pues esta última medida, por su propia naturaleza, solamente implica una decisión legislativa de carácter coyuntural, ante situaciones de hecho o imprevistas, que demandan la emisión de disposiciones contingentes que permitan dar un paso ordenado al cumplimiento de los demás preceptos cuya vigencia no está sujeta a una temporalidad específica. [...] Consecuentemente, tanto el Instituto Estatal del Estado de Guerrero, como el Tribunal Electoral de la misma entidad, cuentan con las garantías elementales para salvaguardar su independencia y autonomía, de manera que resulta infundado que la sola circunstancia de que los nombramientos de sus integrantes hubieran sido prorrogados por un plazo de un año, provoque la pérdida automática de tales atributos, pues los mismos están dispuestos para revestirlos de esas características al



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

margen del tiempo de su desempeño". Concluyó en que su criterio personal no contraviene ningún precedente de esta Suprema Corte.

Por lo que ve al tema de la supuesta violación al principio de división de poderes, advirtió que el proyecto señala que la intromisión del Congreso de la Unión para cambiar las reglas y generar privilegios o ventajas en favor de las personas designadas, resulta violatorio de ese principio. Al respecto, consideró que no se cambiaron las reglas, porque se eligieron a los magistrados, de acuerdo con las etapas correspondientes a esta Suprema Corte y al Senado, se determinó su temporalidad en función de la ley vigente en ese momento, emitida por el Congreso de la Unión en uso pleno de sus facultades. Por tanto, estimó que la reforma, lejos de desestabilizar, fortalece el tiempo de designación de los magistrados, puesto que los amplía, por lo que no se suscita ningún problema de inconstitucionalidad.

En lo concerniente al tema de la supuesta violación al principio de seguridad jurídica y de irretroactividad, valoró que no existe dicha violación. Señaló que no se violó la seguridad jurídica, puesto que el cambio se estableció en una ley, además de que fue reformada de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes secundarias respectivas, aunado a que, una vez que fue reformada, el Senado llevó a cabo los actos administrativos necesarios para poder implementarla, es decir, en cuanto a la toma de



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

protesta y la declaratoria correspondiente. Tampoco se violó el principio de irretroactividad, pues no establece efectos hacia el pasado, sino respecto de los magistrados que aún no tomaban posesión en su encargo.

Apuntó que el proyecto da cuenta de la acción de inconstitucionalidad 80/2008, en la cual se estableció una tesis alusiva al principio de retroactividad, en cuanto a que la Asamblea Legislativa del —entonces— Distrito Federal adecuó las leyes correspondientes para determinar el procedimiento y el número de consejeros electorales.

Por estas razones, se manifestó en contra del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para una próxima sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Siendo las trece horas con un minuto, el señor Ministro Presidente Aguilar Morales convocó a los señores Ministros para una sesión privada, una vez que se desaloje la Sala, así como a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes veintisiete de junio del año en curso, a la hora de costumbre, y levantó esta sesión.



S. P. Ordinaria Núm. 59

Lunes 26 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



UPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
RETARIA C L LE CUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN